

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)**

DEMANDANTE	: ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO
DEMANDADO :	: MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA Y GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-308-31-03-001-2019-00145-01
RADICADO INTERNO	: 070-21
DECISIÓN	: REVOCA PARCIALMENTE, ABSUELVE, MODIFICA, CONDENA, DECLARA, ACLARA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 196

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el Decreto 806 de 2020: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante, solicita se DECLARE que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal desde el 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2018, el cual terminó por parte de la trabajadora, por el no reconocimiento de las prestaciones sociales ni la afiliación a la seguridad social; por pago del salario por debajo del mínimo legal desde el año 2015, el pago incompleto de las prestaciones finales, no indemnización a la terminación del vínculo laboral, adeudan la sanción moratoria, no cotización a la seguridad social en pensiones por todo el tiempo laborado, no horas extras, ni el auxilio de transporte, ni la dotación por el tiempo laborado o en su defecto en dinero, no pagaron la sanción por la no consignación del auxilio de cesantía e interés a la cesantía, ni la

sanción moratoria del art 65 del CST. Solicita se CONDENE a los demandados por lo anterior, en forma solidaria y/o por separado, incluidas las vacaciones, la pensión de vejez por 25 años de trabajo ininterrumpido o la cotización en pensiones al fondo que la demandante elija.

Fundamenta sus pretensiones en que la demandante se vinculó como empleada del servicio doméstico de manera verbal desde enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2018; la terminación del contrato se generó por renuncia provocada porque los empleadores no le pagaban prestaciones sociales ni la tenían afiliada a la seguridad social integral; la jornada laboral era de lunes a sábado de 6:30 am a 5:00 pm, y laboraba los lunes festivos sin que le pagaran auxilio de transporte, horas extras, ni recargos por los lunes festivos y descansaba los miércoles. El último salario devengado fue de \$150.000 semanales y \$643.500 mensuales, el cual era inferior al salario del año 2018. Que inicialmente laboró con la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA en la casa urbana y en la finca de su propiedad, y a los 6 meses comenzó a laborar en la casa de los señores MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA Y GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA, con el mismo horario, salario, sin pago de prestaciones sociales ni aportes a la seguridad social. En la casa de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA laboraba los días martes, jueves y sábados, en la casa de su hija MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA los días viernes y en casa de GUILLERMO CADAVID los lunes. Que la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA le pagaba cada ocho días \$90.000 y cada uno de los señores MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA Y GUILLERMO CADAVID le pagaban \$30.000 por día laborado. Que la demandante renunció en diciembre de 2018 ante el incumplimiento de sus empleadores; el 31 de marzo de 2019 le liquidaron \$6.727.200 por las prestaciones sociales causadas del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2018; que al haber reconocido las prestaciones sociales desde el 1º de enero de 2004, los demandados renuncian a la prescripción de los derechos laborales. Que la demandante fue liquidada de manera parcial, incompleta y con un salario por debajo del mínimo legal. Que la demandante no fue afiliada a la caja de compensación.

**El Sr. GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA** en contestación de la demanda no acepta los hechos de la demanda aduciendo que nunca tuvo contrato de trabajo con la demandante; que nunca le asignó, ni ordenó días o jornadas de trabajo, no le llegó a asignar labores específicas o determinadas a la demandante. La accionante en épocas distintas a las que se dice en la

demanda, le prestó algunos servicios ocasionales, intermitentes o discontinuos al demandado, y cada vez que lo hizo, se le pagaba el valor que pedía el cual era superior al salario mínimo, y en el año 2018, cuando llegó a prestarle algún servicio, le pagó \$45.000 por cada día. No le consta los servicios que le haya prestado a la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA. Que antes del año 2011 el accionado no llegó a tener relación de servicio, ni de ninguna naturaleza con la demandante, que a mediado de tal anualidad, la accionante le ofreció asear su apartamento y desde entonces lo hacía de manera ocasional, era ella quien se ponía las horas y casi nunca llegaban a las 8 horas, ella decidía el día y determinaba las actividades que prestaba, nunca recibió instrucciones de manejo por parte del demandado. Que no prestó servicios en días fijos y determinados; que en un mes unas veces le colaboraba cuatro días o dos días y con frecuencia un solo día y nunca llegó a prestarlos en días festivos. Cuando recibió algún servicio de la demandante en el año 2016 y 2017, le pagó \$40.000 por cada día y en el año 2018 le pagó \$42.000 por cada día. Que dada la modalidad del servicio, no hubo una relación de dependencia o subordinación y por la ocasionalidad de la prestación económica no hay lugar a causación de los conceptos que se solicitan. Que nunca recibió reclamación por la demandante ni renuncia. Que el accionado no intervino en liquidaciones o reconocimiento de prestaciones sociales.

**La Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA** en la contestación de la demanda manifiesta que en el recibo de pago de las prestaciones sociales acepta que su primer año de labores inició en el 2004. Que sus labores no fueron realizadas en forma continua e ininterrumpidas, y desde el recibo de pago de prestaciones sociales aceptó y afirmó que laboraba martes y jueves a la semana y los restantes días no prestaba sus servicios en su casa. Que la demandante tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato de trabajo al dejar de ir a prestar sus servicios. Para prestar las labores domésticas en casa de la demandada no tenía hora de ingreso ni salida; la hija de la demandada le entregaba los pasajes a la demandante todos los días. Con el recibo de pago de prestaciones sociales, acepta la demandante que se le pagó horas extras y el día dominical. Desde el año 2004 se le pagó \$30.000 por día laborado, el cual supera el salario mínimo. Las labores siempre se realizaron en el domicilio de la demandada. La demandante renunció a ser afiliada a la seguridad social por estar afiliada al SISBEN; la demandada le reconoció \$6.727.200 por prestaciones sociales sabiendo que no laboraba jornada completa, no estaba subordinada a horario de trabajo. Que la demandante recibió el pago de las prestaciones sociales el 11 de enero de 2018 y 3 meses después demandó.

**La Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA** en su contestación de la demanda no acepta los hechos de la demanda; que no es cierto que el vínculo laboral fuera continuo e ininterrumpido porque solo era un contrato de prestación de servicios por un día cada 15 días. No le consta los horarios de trabajo porque la demandante laboraba para otra entidad. No tiene derecho a horas extras porque la demandante le hacía el aseo un día a la semana y era un contrato de prestación de servicios. La accionada le pagaba \$30.000 más auxilio de transporte. Que los viernes trabajaba ocasionalmente. La demandante no trabajó 25 años.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 15 de febrero de 2021, el Juzgado Civil con conocimiento en Procesos Laborales del Circuito de Girardota, DECLARÓ la existencia de una relación laboral entre la demandante como trabajadora y la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2018, con la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MÚNERA SIERRA entre el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018, y con el señor GUILLERMO CADAVID entre el 1º de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2018, existiendo así concurrencia de contratos laborales, los cuales se dieron por terminados por decisión unilateral de la trabajadora. Declaró probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por los demandados. Declaró que los señores GUILLERMO CADAVID y MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MÚNERA SIERRA le adeudan a la demandante las prestaciones sociales y vacaciones. Que los señores MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, GUILLERMO CADAVID y MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MÚNERA SIERRA le adeudan dotación de vestido calzado y labor, auxilio de transporte, y se encuentran en mora de pagar los aportes a la seguridad social en pensiones a la demandante.

CONDENÓ al Sr. GUILLERMO CADAVID, a pagar a la demandante la suma de \$259.995 por concepto de auxilio de cesantía de 2011 a 2018, \$14.560 por concepto de intereses a las cesantías de 2015 a 2018, \$77.999 por concepto de vacaciones de 2014 a 2018, \$103.998 por concepto de prima de servicios de 2016 a 2018; \$500.000 por concepto de dotación vestido calzado de labor por los años 2015 a 2018; \$981.190 por concepto de auxilio de transporte; pagar los aportes a la seguridad social, por los periodos comprendidos entre junio de 2011 y diciembre de 2018 a favor de la demandante, los cuales se

harán conforme lo establecido en el artículo 6 Decreto 2616 de 2013, por dos (2) cotizaciones mínima semanal mensual, con un salario base de cotización de \$240.000; pagar por concepto de sanción del artículo 65 del C.S.T., un total de \$21.600.000; pagar por concepto de sanción del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a favor de la accionante la suma de \$54.000.000; pagar por concepto de sanción del artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la suma de \$12.480.

CONDENÓ a la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MÚNERA SIERRA, a pagar a la accionante \$104.000 por concepto de auxilio de cesantía de 2012 a 2018, \$7.280 por concepto de intereses a las cesantías de 2015 a 2018, \$39.000 por concepto de vacaciones de 2014 a 2018, \$51.999 por concepto de prima de servicios de 2016 a 2018; \$500.000 por concepto de dotación vestido calzado de labor, por los años 2015 a 2018; \$490.594 por concepto de auxilio de transporte; pagar los aportes a la seguridad social, por los periodos comprendidos entre enero de 2013 y diciembre de 2018 a favor de ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO, los cuales se harán conforme lo establecido en el artículo 6 Decreto 2616 de 2013, por una (1) cotización mínima semanal mensual, con un salario base de cotización de \$120.000 mensuales; pagar por concepto de sanción del artículo 65 del C.S.T., un total de \$21.600.000; pagar por concepto de sanción del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 la suma de \$43.200.000; pagar por concepto de sanción del artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la suma de \$6.240.

CONDENÓ a la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, a pagar a la demandante \$500.000 por concepto de dotación vestido calzado de labor por los años 2015 a 2018; \$781.188 por concepto de auxilio de transporte; a pagar los aportes a la seguridad social, por los periodos comprendidos entre enero de 2004 y diciembre de 2018 a favor de la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO, los cuales se harán conforme lo establecido en el artículo 6 Decreto 2616 de 2013, por dos (2) cotizaciones mínimas semanales mensuales, con un salario base de cotización de \$240.000; pagar por concepto de sanción del artículo 65 del C.S.T., un total de \$21.600.000; pagar por concepto de sanción del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la suma de \$140.400.000; pagar por concepto de sanción del artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la suma de \$24.960.

ABSOLVIÓ a los demandados de las demás pretensiones incoadas en su contra. Condena en costas procesales a cargo de los accionados.

**Aclaración sentencia a solicitud del apoderado del Sr. GUILLERMO CADAVID:** manifestó la Juez, que se dio por demostrado que fueron dos días a la semana por cada semana del mes, que la demandante laboró para el demandando, y así se hicieron las liquidaciones.

Posteriormente, señala la A Quo, que cuando hizo la aclaración, se equivocó. Que al revisar y conforme quedó la en las liquidaciones hechas, para el Sr. GUILLERMO CADAVID lo que el despacho determinó es que se trató de una relación laboral que estaba llevada con una dinámica de dos días al mes, no a la semana, porque como lo dedujo, de ese hecho de la demanda que él dice que está mal analizado, dijo que eran por equidad que no iban a ser cuatro ni iba a ser uno, sino dos días al mes.

### **IMPUGNACIÓN**

**La apoderada de Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA** argumenta que si bien el juzgado valoró el documento por medio del cual se hizo el pago de prestaciones sociales, reconoció que la demandante prestó su firma y colocó su huella, del documento se pudo extraer que la fecha de vinculación con la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA fue del año 2004.

Que la Juez resaltó que prevalece el documento, pero ante las imputaciones de los cargos y las sanciones que se le hace a la demandada, observa que en los numerales 1º y 2º de ese documento, se deja claro que el patrono incorporó en la liquidación los importes correspondientes a salario, horas extras, descansos, compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte y todo concepto relacionado con salario, prestaciones e indemnizaciones causados al quedar extinguido el contrato de trabajo, y en el numeral 2º es claro, que con el pago del dinero anotado en la liquidación, quedó transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, extinguido o cualquier diferencia anterior, por lo tanto, la transacción firmada tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral de las señoras MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA y ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO, en donde se firmó por ambas, de común acuerdo, quedando extinguido el contrato de trabajo en concordancia con el art 61 del CST y desde el derecho civil, en el art 1625 del CC.

**La apoderada de la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA** solicita se revoque el auto del 15 de febrero, por medio del cual el juzgado se abstuvo de dar trámite a la excepción propuesta por parte del demandado, y se disponga el trámite correspondiente; que el escrito de excepciones fue presentado el 18 de marzo de 2020, ello es, dentro del término que concede la ley a la demandada para defenderse contra las pretensiones del demandante, y este término se encuentra vencido.

Y que no hay congruencia entre los hechos y relatos que se dicen en el interrogatorio y de lo anterior se constituye una violación a las normas mencionadas, las cuales deben ser observadas en orden estricto. Así mismo invoca como fundamento en los arts 65, 66 y 15 (no se señala la normatividad a la que corresponden).

**El apoderado del Sr. GUILLERMO CADAVID** en síntesis considera en **primer lugar**, que no hubo prueba clara y contundente del tipo de relación que existió entre su representado y la demandante.

**En segundo lugar**, manifiesta que en caso de asumirse que se trataba de una relación laboral, no está de acuerdo con la decisión en ninguno de sus aspectos, porque si bien la relación laboral se presume conforme el art 24 del CST, no solo es válido para una empleada del servicio doméstico sino para cualquier tipo de persona natural que presta un servicio; que en esta instancia se da por demostrado un hecho que a su juicio no puede deducirse en la forma como se plantea, para determinar la prestación del servicio de dos días a la semana.

**En tercer lugar**, considera que con la presente demanda se asalta la buena fe de los demandados porque se encuentran hechos que resultan desvirtuados, tales como, que el extremo inicial haya sido 1994, que la demandante trabajó para el Sr. GUILLERMO CADAVID todos los lunes por órdenes de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, que se le pagó menos del salario mínimo, la renuncia por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales y la no afiliación cuando en el interrogatorio dijo que la renuncia fue porque se sentía cansada o porque tenía algunas enfermedades, la demandante reconoce que la relación laboral se trató de una relación exclusiva, personal y específica con la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, pero estos hechos que no tuvieron consecuencias para la accionante.

**En cuarto lugar**, frente a las indemnizaciones de los arts. 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, advierte que los testigos de la parte accionante repiten los hechos de la demanda y manifestaron que el único conocimiento que tienen de los hechos era porque “ADELITA” les contaba y ninguno de los testigos conoce a su representado, pero saben todo lo concerniente a la relación laboral que existió, y el único testigo que conoce al Sr. GUILLERMO CADAVID, lo conoció después de terminada la relación laboral porque la demandante y su apoderado se lo mostraron, y por ello no comparte la decisión de la indemnización por el incumplimiento en el pago de prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, para predicarlo como un comportamiento de mala fe de parte de su mandante. Y bajo la misma tesis, la sanción que proceda respecto a la no consignación del auxilio de cesantías.

Que es necesario explorar porqué dejó de consignar unas cesantías y de pagar las prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, y en su concepto el accionado demostró porqué el demandado estuvo convencido que no estaba frente a un contrato de trabajo, y más cuando en el ambiente laboral y cultural, la prestación del servicio doméstico se comenten injusticias. Que no es justo que se le impongan una sanción drástica a todos los demandados con respecto a unas obligaciones de las cuales tenían la plena conciencia equivocada.

**En quinto lugar**, si bien acepta que se tratan de tres relaciones laborales diferentes y bajo ese entendido cada relación laboral se debió haber dejado como una relación individual y no como una pluralidad de empleadores, señala que se está dando por demostrado que la relación con el Sr. GUILLERMO CADAVID inicio el 1º de junio de 2011 y el extremo final lo fue el 31 de diciembre de 2018 con base en la liquidación de prestaciones sociales que realizó la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, la cual es una relación ajena e independiente, diferentes a la relación que tenía con su representado. Que no quedó probada la fecha de la finalización del real o presunto vínculo laboral.

Y reitera que en el tiempo transcurrido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2018, en gracia de discusión, se desvirtuó la periodicidad, no quedó demostrados los días de la semana, y si la prestación del servicio era de uno o dos días a la semana o dos días al mes.

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**



**La apoderada de la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA** manifiesta que la juez no tuvo en cuenta lo que los testimonios al unísono manifestaron; que no hizo las valoraciones pertinentes, teniendo en cuenta que el valor probatorio presentado por la parte demandante fue incompleto y carente en el medio de la prueba; solicita se escuche la cantidad de incertidumbres cuando la demandante da en sus respuestas. Que no se logró probar que Adela de Jesús, marco horas extras de trabajo con su representada, si iba un día en la semana, si iba a prestar sus servicios por 4 horas; frente a la dotación de calzado y vestido de labor considera que si la demandante laboraba 5 horas cada 15 días, la ley no expresa que dicha dotación es obligatoria; que la Sra. ADELA DE JESÚS no era trabajadora permanente, por lo que no tiene derecho a dicho concepto. Que las pruebas testimoniales de la demandante, no aclaran los días laborados para su representada, porque ninguno pudo dar fe absoluta y ni constancia del tipo de vinculación o del contrato que tenía, cuantas horas trabajaba de más, y el día trabajado, porque no les consta. Que no puede reclamar prestaciones sociales a sabiendas que el día miércoles la demandante iba a colaborar al cementerio de Girardota, y la prueba teniendo la facultad para pedir prueba de oficio y escuchar la declaración del representante del cementerio no lo hizo. Manifiesta que la A Quo reconoció que el señor Oscar Benjumea, no era un testimonio creíble ni verídico para esclarecer los hechos de la demanda. Y que en la audiencia no se tuvo en cuenta las excepciones de mérito.

**El apoderado del Sr. GUILLERMO LEÓN CADAVID** solicita se revoque la sentencia en su integridad o en subsidio se revoque parcialmente la providencia, en lo referente a las sanciones impuestas por no pago oportuno de intereses sobre las cesantías, por no pago oportuno de prestaciones sociales y por no consignación de cesantías en un fondo autorizado, así como la condena al pago de aportes al sistema pensional.

Sustenta sus alegatos, en primer lugar, que el despacho declaró que el servicio prestado por la demandante al señor Guillermo Cadavid estuvo mediado por una relación laboral, pero en contra lo evidenciado se dio por demostradas, sin estarlo, características especiales y fundamentales de esa relación como la prestación periódica y los extremos temporales, sin embargo en la tesis de la Corte Suprema de Justicia, la subordinación se presume, pero la carga de probar la actividad y las particularidades de ésta, le incumben a la trabajadora, quien en este caso particular no cumplió con ella. Erró la A Quo, al haber

acudido a una supuesta confesión que dedujo de la respuesta, a los hechos 10 y 11 de la demanda, los descontextualizó y dejando de tener en cuenta otros medios de prueba tal y como es, el interrogatorio de su mandante, en el que se desvirtúa la presunta confesión, así como los testimonios. Que la manifestación realizada fue meramente descriptiva o a modo de ejemplo, pero no de reconocimiento y no se compadece con lo dicho por el accionado en su interrogatorio de parte. Que esa relación fue esporádica, intermitente, discontinua y ocasional, al punto de no hacer objetivamente posible precisarla para determinar las acreencias laborales que se reclama la actora, ni aun para el propio demandado, lo corroboran. Retoma lo dicho por los testigos Marco Blandón, Alexander Valencia y Dairo Alzate; que estos medios de convicción no fueron desvirtuados con la prueba testimonial de la demandante por su absoluta falta de credibilidad, porque sus testigos fueron de oídas y ninguno se trata de un testigo directo. Que, con lo anterior, se derrumba la confesión deducida sobre la supuesta periodicidad de la relación. Que la demandante en su demanda e interrogatorio, siempre dijo que había trabajado para el demandado una sola vez en la semana.

Se opone a que, para desatar el presente asunto, se establezca una inexistente prestación del servicio dos días a la semana, adecuada a criterios de “equidad” porque en aras de los derechos fundamentales a la defensa y de contradicción, la solución debe ser acogida única y exclusivamente con las pruebas aportadas al plenario. Considera que la conclusión a la que se llega en primera instancia, de la periodicidad de la prestación del servicio, genera incertidumbre fáctica y jurídica y hasta el mismo Juzgado terminó por generar aún más confusión a lo largo de la sentencia, porque amparado en la supuesta confesión del señor Guillermo Cadavid, en unos apartes, da por probado que el presunto reconocimiento del servicio fue de un día a la semana, en otros dice que fueron dos a la semana y en otros dos al mes, sin embargo, el demandado y los testigos dijeron que hubo meses en que no colaboró ningún día.

En segundo lugar, considera que en similar desatino incurre la providencia, frente a los extremos de la relación de la demandante con el señor Guillermo Cadavid, porque a pesar de falta de prueba en contrario, desde las consideraciones había introducido la tesis, de la existencia de tres relaciones diferentes en el tiempo y en sus características, sin contar con un soporte concreto da por demostrado, que la relación de la demandante con el señor Cadavid terminó el 31 de diciembre de 2018; que en un aparte de la

providencia manifiesta que la relación laboral era una sola siendo esta una contradicción en la motivación del fallo.

Que ni en la contestación de la demanda, ni en el interrogatorio de parte, ni las demandadas reconocen que la demandante hubiera llegado donde el accionado por recomendación de la señora Luz (tampoco lo dijeron las demás demandadas), sino que señaló el demandado en su interrogatorio que a mediados de 2011 la demandante le ofreció prestarle servicios y no supo que la Sra. Luz hubiera pagado liquidación ni que la Sra. Adela tuviera quebrantos de salud. Que ningún medio de prueba permite establecer cuándo prestó por última vez el servicio la demandante al Sr. Guillermo Cadavid.

Considera que no quedaron claramente definidos ni probados los extremos de iniciación ni de finalización de la relación laboral con su representado; que siguiendo las pautas de la Corte Suprema de Justicia, cuando no se tiene certeza de la fecha, cuando el demandado indica que la actora lo abordó por primera vez a mediados del año 2011, es por lo que el inicio no podría ser el 1° de junio sino el 30 de junio de 2011.

Y en tercer lugar, se pronuncia frente a la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo; que considera gravemente lesiva de su integridad y patrimonio, la decisión de condenarlo al pago de las cuantiosas sanciones contempladas en el art 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el art. 99 de la Ley 50 de 1990; que las normas que establecen una sanción son de aplicación restrictiva y por tanto, en caso de declararse judicialmente la existencia de la obligación, exigen explorar en cada caso si para no haberla satisfecho el real o presunto obligado obró de buena o mala fe. En el caso del Sr. Cadavid se aportó elementos suficientes de convicción para explicar por qué no hizo pagos periódicos o definitivos de prestaciones sociales o por qué no hizo aportes a la seguridad social como empleador. Retoma apartes de la sentencia 23.987 del 2005. Reitera que la relación fue absolutamente intermitente, fue esporádica y totalmente discontinua.

Con base en lo señalado, la parte recurrente disiente, que se acuda genérica y subjetivamente a comparar a los sujetos procesales confrontados, creemos que, incurriendo en discriminación indebida e innecesaria, al decir o insinuar que la mala fe de su representado. Que, habiéndose tratado de distintas relaciones, las contraídas por la actora con los demandados, no podían equipararse entre sí ni evaluarse como una sola, porque cada una tuvo

circunstancias de modo, tiempo y lugar diferentes, y con factores como una eventual continuidad o periodicidad en el servicio.

**La apoderada de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OSPINA** solicita se desestime la condena de primera instancia en primer lugar, porque en la sentencia no se hizo las valoraciones pertinentes luego de que el medio de la prueba presentado por la parte demandante fue deficiente y defectuoso. Y en el interrogatorio de parte, la demandante tuvo imprecisiones en sus respuestas. La A Quo cayó en yerro judicial, menoscabo la verdad material y acepta las dudas que genera la parte demandante, le dio credibilidad en sus declaraciones temerosas.

Que no se le puede dar credibilidad a la parte demandante en la construcción de los hechos cuando sus respuestas son vagas, tal y como se denota, cuando en el interrogatorio se logró demostrar no hay una congruencia entre los hechos y las pretensiones de la demanda, se dio respuestas vagas y fuera de contexto, tal y como es en sus datos personales, son claros los hechos de la demanda pero en el interrogatorio hay imprecisiones afirmó; en el hecho 21 de la demanda, que su salida del trabajo fue provocada con un despido injusto pero en el interrogatorio afirmó que el retiro de la casa de MARÍA LUZ SILVIA SIERRA, fue voluntario; se solicitó el reconocimiento del auxilio de transporte, pero en el interrogatorio de parte afirmó que se lo reconocieron desde el año 2012.

Con el recibo del pago de sus prestaciones sociales, se acredita el pago realizado y para el despacho, ese documento prevaleció de manera relevante para fijar la fecha de ingreso para la Sra. María Luz Silvia Sierra Ochoa, sin embargo, no le sirve al despacho, para la extinción de las obligaciones laborales, cuando en la transacción queda claro y no deja la menor duda sobre la intención de los intervinientes en el acto jurídico.

Considera que la condena impuesta es exorbitante y fuera de la realidad, por las razones expuestas; no hay lugar a condenar a los conceptos pretendidos en la demanda, teniendo en cuenta que el documento de transacción prevalece y conduce a la verdad material, y está probando que se le entregaron todas sus prestaciones sociales, y tiene dos cláusulas, las cuales hizo constar las obligaciones y quedaba transada cualquier diferencia.

**Finalmente, el apoderado de la parte accionante** solicita se confirme la sentencia de primera instancia, e insiste en el derecho a conceder y pagar la pensión de vejez a la demandante en el evento de estar demostrado.

Sustenta sus alegatos, en haber quedado probado que la demandante se desempeñó como trabajadora domestica de los demandados; que estos trabajadores están protegidos por el Decreto 2663 de 1950, Ley 1595 de 2012, Decreto 2616 de 2013, ley 1778 de 2016, art. 1º a 4º, 10 a 13 literal a), 15 numeral 1º, 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, y las sentencias T 237 de 2011, 871 de 2014, 185 de 2016, 345 de 2016.

Que la prueba aportada al plenario, es contundente, precisa e indicativa de la violación de la normatividad laboral y de la seguridad social, a la accionante. Los accionados confesaron que la demandante laboró para ellos en el servicio domestico desde el año 2004, y con esta prueba se busca la declaración del derecho a la pensión de vejez. Los demandados aceptan que a la fecha no han pagado las prestaciones sociales, con excepción de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA que liquidó en forma incompleta. Que a la demandante no le pagaron o le pagaron en forma tardía e incompleta, las prestaciones sociales, vacaciones, dotación, auxilio de transporte, todos los demandados violentaron el derecho la seguridad social en pensiones.

Deja por sentado, que la demandante es adulto mayor, analfabeta, con escaso entendimiento para la construcción de ideas, falta de memoria, por lo que desde el inició la A Quo manifestó la complejidad para desentrañar la verdad, la cual se concretó, y ello dificultó ayudarle a desentrañar la realidad de lo que sucedió entre las partes. Sostiene que la demandante laboró mas de 20 años. y solicita se falle extrapetita, ordenando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la demandante.

### **CONSIDERACIONES**

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar: i) Si la “transacción” firmada por las señoras MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA y ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO de común acuerdo, tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral y quedó transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo, extinguido o cualquier diferencia anterior; ii) Si hay lugar a revocar el auto del 15 de febrero y a darle tramite a la excepción propuesta por la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA; iii) Si se logró acreditar que entre

los señores ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO y GUILLERMO CADAVID existió una relación laboral, los días que prestó sus servicios en la vivienda del demandando, la periodicidad y el extremo final de la relación laboral; iv) Si hay lugar a condenar al Sr. GUILLERMO CADAVID y a las demás accionada, al pago de la de la indemnización moratoria del art. 65 del CST y la sanción moratoria de art. 99 de la Ley 50 de 1990.

El análisis se realizará en el siguiente orden:

**1. De la transacción realizada por las señoras MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA y ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO**

Respecto a las transacciones en materia laboral, el art. 53 de la CN señaló:

*“ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:*

*... irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;. (...)” (Resalto fuera del texto)*

Dicho artículo debe ser analizado en concordancia con los arts. 14 y 15 del CST que rezan:

*“ARTICULO 14. CARÁCTER DE ORDEN PUBLICO. IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.*

*ARTICULO 15. VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.”*

Y respecto a los derechos inciertos y discutibles, retomamos el art. 65 de la Ley 446 de 1998 determinó igualmente la posibilidad de conciliarlos.

En consecuencia, como derechos ciertos o indiscutibles que son susceptibles de transacción, se ha catalogado el salario, las prestaciones sociales, los descansos remunerados, los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, entre otros, por tratarse de derechos consagrados en las normas sustantivas como derechos mínimos y por ser de orden público que los hacen irrenunciables.

Al remitirnos a la LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES” visible a fl. 13, se plasmó lo siguiente:

“SE HACE CONSTAR:

*1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.*

*2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre LUZ SIERRA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.”*

De su contenido resalta la Sala, que los conceptos de “*salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones*” no son susceptibles de transacción, por tratarse de derechos ciertos e indiscutibles, por lo tanto se CONFIRMARÁ la condena impuesta por concepto de auxilio de transporte.

En lo que respecta a la condena al **calzado y vestido de labor**, se REVOCARÁ su reconocimiento, toda vez que este concepto solo se debe suministrar durante el tiempo que esté vigente el vínculo laboral, o una vez terminado, se acredite los gastos en que incurrió el trabajador, lo cual no quedó probado en este proceso. Adicionalmente, con fundamento en el numeral 2º de la constancia plasmada en la liquidación definitiva de prestaciones sociales, se entiende realizada la transacción de este concepto.

En lo que respecta a la **indemnización del art. 65 del CST**, se debe analizar si existió el pago completo de las prestaciones sociales y si el mismo se hizo en forma oportuna. En este momento, se hace necesario advertir, que para la Sala, la forma correcta determinar el salario mensual de los trabajadores por días es la siguiente: tomar el salario devengado en la semana dividido 7 días de la semana y multiplicarlo por 30 días del mes. Para el caso que nos ocupa correspondería a: \$60.000 (dos días a la semana cada uno se pagaba \$30.000) \*7= \$8.571,42\*30=**\$257.143**, pese a esto, en primera instancia se determinó un salario de **\$240.000** para los años 2015 a 2018, el cual se tomará para realizar la liquidación, al cual no existe inconformidad por la parte

accionante y porque al ser la demandada apelante única, no se le puede desmejorar la decisión.

Una vez revisada la liquidación definitiva de prestaciones sociales y realizada las operaciones por la Sala, con base en una periodicidad de dos días a la semana laborados y un salario diario de \$30.000, desde el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2018 (frente a lo cual no hay oposición por parte de la accionante), se percibe que la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA adeudaría a la demandante la suma de **\$291.379**, en vista que el pago que se debió reconocer ascendía a la suma de \$7.018.579 y la suma cancelada fue de \$6.727.200. Suma adeudada que no hay lugar a reconocer en esta instancia, en primer lugar porque no fue objeto de recurso de apelación por parte de la accionante y porque en virtud de la prescripción parcial que se declaró en primera instancia, la Sra. SIERRA OCHOA a la terminación del contrato de trabajo estaba llamada a cancelar el auxilio de cesantía de todo el tiempo de servicio, los intereses a la cesantía de los años 2015 a 2018, prima de servicios de los años 2016 a 2018 y vacaciones de los años 2014 a 2018, frente a los cuales no existe duda que fueron cancelados.

Ahora bien, en relación con la fecha en que se realizó el pago de las prestaciones sociales se evidencian contradicciones entre demandante y demandada, estando en cabeza de la demandada SIERRA OCHOA zanjar dicha controversia sin que lo haya hecho, en vista que sus testigos nada dicen al respecto. En este sentido, como la demandante asegura que el pago fue realizado el 31 de marzo de 2019, la condena por este concepto se liquidará con base en un día de salario de \$30.000 (reconocido en primera instancia) por cada día de retardo causado desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019 (que equivale a 90 días de mora), lo que da lugar a MODIFICAR la suma reconocida en primera instancia, para en su lugar CONDENAR a la accionada MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA a reconocer y pagar la suma de **\$2.700.000** por indemnización moratoria causada desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019.

Frente a las **sanciones moratorias del art. 99 de la Ley 50 de 1990** considera la Sala que es procedente su reconocimiento, al estar acredita la falta de consignación del auxilio de cesantías en un fondo por el tiempo que duró el contrato laboral, y teniendo en cuenta que en primera instancia se liquidó esta sanción por el periodo comprendido entre los años 2005 a 2017 que en ningún momento es concomitante con la sanción del art. 65 del CST, la cual fue



liquidada en esta instancia desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019; y sin que pueda ser exonerada la accionada del pago de esta sanción en virtud de la liquidación - transacción, bajo el entendido, que en la liquidación de prestaciones sociales no se realizó el pago de una suma adicional para transar por este concepto, en vista que por las prestaciones sociales y vacaciones la suma a reconocer era de \$7.018.579 y la suma cancelada fue de \$6.727.200.

Por su parte, en lo que respecta a la sanción del **art. 1º de la Ley 52 de 1975**, la misma se **REVOCARÁ** al haber sido reconocida la indemnización del art. 65 del CST, sin que ambas puedan ser reconocidas en forma simultánea, al tenor de lo dicho en la sentencia, radicado 27.186 del 29 de septiembre de 2006.

## **2. De la revocatoria del auto del 15 de febrero y a darle trámite a la excepción propuesta**

La apoderada de la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA sustenta el recurso, manifestando que el Sr. Aristides (apoderado) impetra una demanda el 8 de julio de 2019 ante el Juzgado 1º laboral contra su poderdante. Se admitió la demanda y ordenó correr traslado a la demanda, quien se notificó de la misma el 10 de marzo de 2020, contestando y proponiendo las excepciones. Que como lo señala en la audiencia, si existió un contrato laboral, que no es verdad que la demandante entró a laborar desde el año 1994 como lo describe; que el Sr. Aníbal de Jesús (cónyuge demandante) falleció el 16 de octubre de 1995 y no como lo informó la demandante y la hija Adriana, y María Benjumea (hija de la demandante) murió el 31 de agosto de 2005. Que el escrito de excepciones fue presentado el **18 de marzo de 2020**, ello es, dentro del término que concede la ley a la demandada para defenderse contra las pretensiones del demandante, y este término se encuentra vencido, por lo que solicita se revoque el auto (sic) del 15 de febrero y se disponga el trámite correspondiente.

Una vez analizado el plenario, no observa la Sala excepciones presentadas por las partes con **fecha de radicación del 18 de marzo de 2020** tal como se indica en el recurso, toda vez que en el expediente digital únicamente reposan las excepciones contenidas en las contestaciones de las demandas (fls. 64, 65, 71 y 84). Adicionalmente, a la luz del art. 31 del CPT y SS, las excepciones que se pretendan hacer valer en el proceso ordinario laboral, se deben formular en la contestación de la demanda, y en este evento las tenidas en cuenta, corresponden a las que reposan en la contestación de la demanda,

por ello en la etapa de decisión de excepciones previas, la A Quo solo hizo referencia a las excepciones contempladas en las contestaciones de la demanda sin referir a la existencia de excepciones en escrito separado.

Así mismo se debe hacer claridad, que no existe auto con fecha del 15 de febrero de 2021, porque ese día lo que se emitió fue la sentencia de primera instancia, pero si a lo que se refiere la recurrente, es al auto del 9 de febrero de la misma anualidad, en donde se resolvieron excepciones previas, era ese el momento oportuno para interponer el recurso, lo cual no hizo.

### **3. De las incoherencias de la demandante alegadas por la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA**

Si bien la parte recurrente no especifica a cuáles hechos incoherentes se refiere, considera la Sala que existe suficiente coherencia en la declaración de la demandante cuando narra: que laboró para los señores MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA y GUILLERMO CADAVID; que la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA fue quien envió a la demandante a laborar a la casa de su hija MUNERA SIERRA, a donde iba los días viernes y por su labor, la Sra. MUNERA SIERRA le pagaba \$30.000 por día laborado. Manifestaciones que fueron admitidas por la misma accionada MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA, cuando en la contestación de la demanda acepta haberle pagado a la demandante \$30.000 y que los viernes trabajaba ocasionalmente; y en el interrogatorio de parte aceptó que la Sra. BENJUMEA AGUDELO trabajó con su mamá dos días a la semana, con ella un día, con su cuñado también trabajó ocasionalmente y los miércoles trabajaba en el cementerio. Que en el año 2012 cuando la accionada se independizó, la demandante comenzó a colaborarle, y trabajó desde el 2012 hasta que se fue en el año 2018; que no le daba liquidación en el mes de diciembre, que en los últimos años la mamá la liquidaba, pero de ellos no tiene recibo y tiene la liquidación que le hizo su madre en el año 2018. Y la testigo Ana María Alzate (hija adoptiva de la demandada MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA) tiene entendido que Adela iba a la casa de Margarita una vez a la semana.

Las únicas incoherencias que se encuentran entre los hechos de la demanda y interrogatorio de parte absuelto por la Sra ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO, corresponden en primer lugar, a la fecha inicial del vínculo laboral con la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, al asegurar que lo fue en el

año 1994 y que con la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA fue seis meses después de estar trabajando con la primera de ellas. Extremo que no fue aceptado en primera instancia porque le dio primacía a la prueba documental (liquidación definitiva de prestaciones sociales) al haberse aportado por la demandante y aparecer firmada por la accionante a fl 94 del expediente digital, documento que fue firmado por la demandante con el aval de uno de sus hijos, y frente a la cual no se desdice el elemento de la prueba documental y porque quedó probado con el dicho de la demandante y de la demandada MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA, que la demandante conoce a la familia demandada desde 1994 porque trabajó el esposo de ella como mayordomo, sin que haya prueba de un testigo que la haya visto trabajando de 1994 en adelante. Y frente a los extremos del vínculo laboral con la MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA, se apoyó en la confesión de la demandada cuando en su interrogatorio acepta que salió de la casa de su madre en el 2012, y en esa anualidad empezó a ir la demandante a su casa, por lo que toma el último día del año, ello es, el 31 de diciembre de 2012.

Hecho corroborado por la testigo CARMEN EMILIA QUIROZ URREGO aseguró haber laborado para la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA desde 1995 a mediados del año 2004, y que para la fecha que la testigo se retiró, la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA aún vivía en casa de su madre y ANA MARÍA ALZATE (hija adoptiva de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA) aseguró que llegó a vivir a la casa de la Sra. SIERRA OCHOA en el año 1993, cuando tenía 6 años de edad, y creció con la Sra. CARMEN EMILIA QUIROZ URREGO, sin que fuera verdad que la demandante laborara desde 1994.

Y la segunda incoherencia, versa en la causa que generó la renuncia de la demandante, al haber manifestado en la demanda que lo fue por incumplimiento de las obligaciones laborales, mientras que en el interrogatorio de parte aseguró que lo fue por su estado de salud y porque no se sentía enferma y no rendía en el trabajo, y frente a dicha afirmación es por lo que en primera instancia absolvió a los demandados de la indemnización por despido indirecto.

Por otro lado, la parte apelante en su recurso, hace referencia a los arts. 15, 65 y 66 sin señalar la normatividad que la contiene, suponiendo la Sala que corresponden al contenido del CST. En este sentido, el primero de ellos, hace

referencia a la validez de la transacción, la cual no le es aplicable a la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA, en vista que la liquidación definitiva de prestaciones sociales fue realizada por la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA frente al contrato de trabajo que tenía con la hoy demandante por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2018, en razón de dos días a la semana, sin que se haya incluido liquidación ni transacción frente a la prestación del servicio de la recurrente, que lo fue entre el 31 de diciembre de 2012 al 18 de diciembre de 2018 en razón de un día a la semana, por lo tanto no prospera esta solicitud.

Y frente a la indemnización moratoria del art. 65 del CST, se CONFIRMARÁ su reconocimiento en cabeza de la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA en primer lugar, porque ni en la contestación de la demanda, ni el recurso de apelación justifica las razones por las cuales solicita su revocatoria, y en segundo lugar, porque para la Sala es clara que, cuando la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA contrató a la demandante, tenía conocimiento de la labor de empleada de servicio doméstico que ella realizaba en la casa de su madre desde el año 2004.

#### **4. Del vínculo laboral existente entre los señores ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO y GUILLERMO CADAVID**

En primera instancia se determina entre estos la existencia de una relación laboral al tratarse de labores de servicio doméstico, además de haber sido aceptado en la contestación de la demanda que el accionado conoció a la demandante en casa de su suegra MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, que la demandante le pidió trabajo pero él le dijo que no le podía dar trabajo pero podía ir a limpiar la casa o a colaborar con algunas tareas, por lo que la demandante empezó a ir y le pagaba \$40.000 o \$45.000, pero para el demandando eso no era salario, que él no le daba órdenes, no le ponía horario y con base a ello considera que no era una relación laboral; y en la contestación de la demanda en el hecho 7º reconoció servicios ocasionales, en el hecho 10º acepta que el extremo temporal parte de mediados de 2011 y en el hecho 11 acepta que dentro de un mismo mes la demandante llegaba a ir, uno, dos, tres o hasta cuatro veces.

Consideró la A Quo que en el presente evento existió una relación laboral con fundamento en la postura de la Corte Constitucional, por medio de la cual declaró como sujeto de especial protección a los trabajadores del servicio

doméstico y se fijó como regla, que por la naturaleza de la labor que desempeñan, se trata de una relación laboral; que al tratarse de una trabajadora del servicio doméstico por días, tenía derecho al reconocimiento de todos los derechos y garantías laborales, conforme se lo establece el art. 197 del CST y dada la protección constitucional del art 53 de la CN.

Por su parte, en el recurso de apelación, el apoderado del Sr. GUILLERMO CADAVID se opone a la existencia de una relación laboral, aduciendo que la versión del demandado en la contestación de la demanda guarda armonía con los testimonios de Dairo Alzate, Marco Blandón y Alex Valencia donde la prestación del servicio no estuvo guiada por una relación de subordinación. Que las pruebas documental y testimoniales dan cuenta que hubo unas relaciones diferenciadas de carácter laboral sin conexidad alguna con el demandado, y esta corroborado porque nadie lo compromete en la conexidad de la presunta relación, para justificar que la demandante fuera a trabajar a su apartamento y porque quedo plenamente establecido en el proceso, que la relación de trabajo fue intermitente, esporádica, discontinua y no fue periódica como se pretendió hacer ver que eran los lunes, lo cual se desmintió con la prueba testimonial, al punto que se hace imposible establecer cuáles fueron los días que estuvo trabajando durante todo este tiempo o para derivar de ello las condenas de prestaciones sociales, indemnizaciones y los aportes a la seguridad social; no se tiene claro qué días y cuales días en el mismo mes llegó a prestar el servicio. Y en caso de asumirse que se trataba de una relación laboral, no está de acuerdo con aplicar la presunción del art. 24 del CST, para la empleada del servicio doméstico.

Pues bien, para determinar si entre los señores Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO y GUILLERMO CADAVID existió un contrato de trabajo, nos debemos determinar si concurrieron los elementos esenciales del contrato de trabajo determinados en el art. 23 del CST y que corresponden a los siguientes: “a. *La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo*; b. *La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador...*; y c. *Un salario como retribución del servicio. (...)*”, donde, es a la parte demandante la que tiene la carga probatoria según lo establecido en los artículos 164 y 167 del C.G.P, de demostrar la **prestación personal del servicio** con el supuesto empleador demandado y que, por ello, recibió una remuneración, además de los extremos temporales de la relación y el salario, tal y como lo ha señalado la Corte suprema de Justicia en sentencia SL 5453 de 2018.

De estos elementos, la Sala encuentran acreditados la actividad personal y el salario pagado a la hoy demandante, luego que la demandada MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA aseguró que la demandante trabajaba con su mamá dos días, con ella un día y con el Sr. GUILLERMO CADAVID también trabajó ocasionalmente; por su parte la testigo ANA MARÍA ALZATE (hija adoptiva de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA) adujo que ADELA iba un día a colaborarle al Sr. GUILLERMO CADAVID; los testigos ALEX VALENCIA y MARCO BLANDÓN (novio y cónyuge de hijas del Sr. GUILLERMO CADAVID) aseguraron que conocían a la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO y la vieron prestando el servicio en la casa del hoy demandado, haciendo labores de la casa en forma ocasional, y el demandando GUILLERMO CADAVID en los hechos 7º, del 10º al 12º de la contestación de la demanda acepta que la demandante le prestó algunos servicios ocasionales, intermitentes o discontinuos y cada vez que lo hizo le pagó el valor que ella pedía y en el año 2018 cuando llegó a prestarle algún servicio le pagó \$45.000, que a mediados del año 2011 la demandante le ofreció asear su apartamento, y desde entonces lo hacía en forma ocasional y siempre recibía un valor superior al salario mínimo legal, que dentro del mismo mes llegaba a ir cuatro días, dos días y con frecuencia un solo día; y que en el año 2016 y 2017 le pagó \$40.000 y en el año 2018 le pagó \$42.000 por cada día.

En consecuencia, con la demostración de la prestación personal del servicio por la parte accionante, es suficiente para dar aplicación de la presunción contenida en el art. 24 del CST, lo cual conlleva a imponerle a la parte accionada la carga de desvirtuar que no correspondía a un contrato de trabajo, lo que no logró desvirtuar, pues no es suficiente haber manifestado que no emitía órdenes, no establecía horarios de trabajo, ni determinaba los días de la prestación del servicio o que los testigos Marco Blandón y Alex Valencia no haya presenciado ordenes, ni directrices dadas por el demandado, cuando lo cierto es que la labor desempeñada por las empleadas del servicio doméstico, no gozan de autonomía técnica, financiera y administrativa para su desempeño y el hecho de que simplemente le dijera que arreglara la casa, por si lleva de suyo una orden.

Y cuando asegura en el recurso, que en los eventos del servicio doméstico no opera la presunción en mención, dicha apreciación se encuentra errada, a la luz del código sustantivo laboral, al entenderla como trabajadora, con jornada especial y prestaciones sociales y al Convenio 189 de la OIT ratificado por

Colombia, por medio del cual se propende por la protección de los trabajadores del servicio doméstico, y en donde, en su art. 10º se consagró el aseguramiento de “1. ... **la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general** en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico. 2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. 3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que se determine en la legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde con la práctica nacional.”, y se encuentra en contradicción con los derechos consagrados en la constitución nacional, a la igualdad, al trabajo justo y digno, a la igualdad de oportunidades para los trabajadores, a la remuneración mínima vital y móvil, la irrenunciabilidad a los beneficios establecidos en normas laborales y la primacía de la realidad sobre las formas.

En conclusión, se CONFIRMARÁ la existencia de un contrato de trabajo entre los señores ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO y GUILLERMO CADAVID.

#### **5. Respecto al extremo final del contrato de trabajo y la periodicidad de la labor desempeñada para el Sr. GUILLERMO CADAVID**

En primera instancia se declaró, que la terminación del contrato de trabajo con el demandado Guillermo Cadavid, tuvo lugar el 31 de diciembre de 2018, teniendo como parámetro, que la renuncia presentada por la accionante se debió a su estado de salud, y al haberle renunciado a la Sra. SILVIA SIERRA OCHOA, lo hizo al mismo tiempo a todas las relaciones laborales al contar con el común denominador, que lo era su estado de salud.

Decisión que es recurrida por la parte accionada, al considerar que no existe prueba del extremo final, más aún, cuando la versión del testigo Alex, dice que al regresó a finales del año 2018, no volvió a ver a la demandante trabajando o prestando sus servicios al Sr. Guillermo.

Estudiada la prueba testimonial, se evidencia que las testigos LUZ MERI RUIZ RESTREPO y MARÍA LÍA RESTREPO GÓMEZ (nuera y cuñada de la demandante) no tienen conocimiento de la fecha de terminación del contrato de trabajo con el accionado GUILLERMO CADAVID, por su parte, el testigo OSCAR DE JESÚS BENJUEMA AGUDELO (hermano de la demandante) asegura que la renuncia fue en diciembre de 2018 y lo sabe porque él estaba en casa de la demandante y ella le contó; el testigo DAIRO ALBERTO ALZATE ARIAS (socio del demandado) no tiene conocimiento porque dijo que no conoce a la demandante, en la reconstrucción del testigo MARCO BLANDÓN (yerno del demandado) nada se dijo del conocimiento de la fecha de terminación del contrato, y en la reconstrucción del testigo ALEX VALENCIA (novio de hija del demandado) dijo que él se fue a vivir a Medellín en el año 2014 y desde esa fecha nunca volvió a ver a la demandante, y cuando regresó en el año 2018, no la volvió a ver.

Visto lo anterior, y al ser claro que no está determinada la fecha final que rigió la relación laboral con el Sr. GUILLERMO CADAVID, pero al ser confesado por el accionado en el hecho 12 de la contestación de la demanda, que en el año 2018 le pagó \$42.000 por cada día, para la Sala es claro que como mínimo trabajó un día en el año 2018. En consecuencia, la terminación unilateral del contrato por parte de la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUEMA AGUDELO será tomada, para el 1º de enero de 2018 y no el 31 de diciembre de dicha anualidad, porque conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades, cuando no se puede determinar el día ni el mes de terminación del contrato, se asume que el contrato finalizó el primer día del año del que se tiene conocimiento. Al respecto, sentencia SL 439 de 2021 Se indicó:

*“sino únicamente en lo relativo al año, es procedente acudir a los criterios señalados por la jurisprudencia de la Sala (CSJ SL905-2013), esto es, tener como aquel el último día del último mes del año. Precisamente, en dicha sentencia la Corporación señaló:*

*En tales condiciones, si se trata de la fecha de ingreso, teniendo únicamente como información el año, se podría dar por probado como data de iniciación de laborales el último día del último mes del año, pues se tendría la convicción que por lo menos ese día lo trabajó. Empero **frente al extremo final, siguiendo las mismas directrices, sería el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado.*** (Negrilla fuera del texto)

Lo anterior conlleva a que se MODIFIQUE el extremo final del contrato de trabajo, para en su lugar declarar que el contrato de trabajo con este empleador tuvo lugar desde el **1º de junio de 2011 al 1º de enero de 2018.**



Por su parte, en lo que respecta a la periodicidad de la prestación del servicio, la A Quo determinó que la labor prestada por la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO al Sr. GUILLERMO CADAVID lo fue por **dos días al mes** en aplicación del art 232 (sic) de la CN que señala que los jueces deben decidir no solo conforme a la ley sino a la equidad, y al no haber prueba concreta que permita establecer la periodicidad, es por lo que equitativamente lo fija en dos días, porque el demandado reconoce más de un día y no reconoce cuatro días al mes porque esto pudo ser esporádico. Sin embargo, al momento de determinar los valores adeudados por prestaciones sociales, indica que la liquidación se realiza con base en **dos días por semana** a pesar de haber aclarado que se liquidó con base en dos días al mes.

Esta decisión es recurrida por el demandado GUILLERMO CADAVID por existir confesión de la demandante de laborar una vez por semana y no estar probada la periodicidad. Que en el hecho 7º de la contestación, su representado dijo que la accionante en épocas distintas a las que dice en la demanda, le presto algunos servicios ocasionales, intermitente o discontinuos y cada vez que lo hizo le pagó el valor que le pedía, y en el hecho 11º manifestó que, durante un mismo mes, unas veces llegaba a colaborarle cuatro días, en otros dos días y con frecuencia un solo día y nunca llego a prestar el servicio en días festivos. Que de ahí no se puede derivar la confesión a la que alude el despacho para dar por demostrado que, en aras de la equidad, la demandante prestó sus servicios al Sr. GUILLERMO CADAVID dos días a la semana y en la demanda y en el interrogatorio, la accionante manifestó que por orden de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA había ido a trabajar donde el Sr. GUILLERMO CADAVID todos los lunes, nunca dijo que trabajara dos veces por semana y ninguno de los testigos entran a especificar los días en que estuvo prestando el servicios a su representado. Hace referencia a las declaraciones de los testigos Dairo, Marco Blandón y Alex Valencia con los cuales considera se desvirtúa la periodicidad y que no llegaron a ver a la demandante prestando el servicio 8 horas continuas.

Analizada la prueba en su conjunto, de los testigos de la parte demandante se extrae el conocimiento, que la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO laboraba para el hoy demandado los días lunes. Dicha prueba queda en duda con las declaraciones de los testigos del accionado, porque el Sr. DAIRO ALBERTO ALZATE ARIAS manifestó ir frecuentemente a la casa del actor sin haber conocido a la demandante, y los señores MARCO BLANDÓN y ALEX

VALENCIA aseguraron ir frecuentemente a la casa del Sr. GUILLERMO CADAVID donde veían a la demandante esporádicamente, y el primero de ellos llegó a señalar que había semanas que no la veía donde el demandando y en un año la llegaba a ver 5 o 6 veces. Pruebas con las que no se logra determinar el tiempo laborado por mes.

En consecuencia con lo anterior, considera esta Corporación, que el análisis que en este caso se debe realizar de manera más flexible, por tratarse de una empleada del servicio doméstico, con poca educación y quien se encuentra en dificultad mayor para probar la razón de su dicho, por ello debe aplicarse las reglas de la perspectiva de género, por la dificultad probatoria en que se desempeñó su labor, dado que la prueba directa se puede recolectar sólo con las personas a las cuales les prestó sus servicios laborales y que por regla general son la parte demandada de la litis. En este sentido, como las pruebas aportadas no se logra determinar la periodicidad, nos debemos remitir a la demanda, contestaciones de la demanda e interrogatorios de parte, y en ellas se encuentra: que la demandante afirma haber laborado un día a la semana para el Sr. GUILLERMO CADAVID, lo que equivale a decir que trabajó 4 veces al mes; por su parte, el demandado manifestó que dentro de un mismo mes, llegaba a colabórale *“cuatro días, otras, dos días y con frecuencia apenas un solo día”*, por lo tanto, con ocasión al análisis probatorio desde la perspectiva de género, el análisis a realizar se dirige a que no puede aceptar, como lo pretende el accionado, que no se demostraron los días y por ello absolverlo de la pretensión o aceptar que la demandante laboró una vez al mes, porque el demandado afirmó que en ocasiones laboró hasta cuatro días al mes, y de otro lado no se podría aceptar que la accionante laboró cuatro días al mes, porque los testigos de la parte accionada hablan de la labor desempeñada fue esporádica y en ocasiones no la llegaban a ver en la casa del accionado, y no se toma una labor desempeñada por tres días al mes porque esta opción no fue exteriorizada por ninguna de las partes en el transcurso del proceso. En este sentido, debe entenderse de manera razonable y plausible que la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO trabajó para el Sr. GUILLERMO CADAVID **dos días al mes.**

Conforme a lo analizado, procede la Sala a realizar la liquidación de las prestaciones sociales, no antes sin manifestar, que la forma de determinar el salario mensual de la demandante en este evento, en donde laboró dos días al mes es el siguiente: \$30.000 (correspondiente al pago de un día a la semana) \*7= \$4.286\*30=**\$128.550**. Pese a esto, en primera instancia se

determinó un salario mensual de **\$120.000** y un salario diario de \$30.000, el cual se tomará para realizar la liquidación, al no existir inconformidad por la parte accionante y por tratarse el Sr. GUILLERMO CADAVID de un apelante único, al cual no se le puede reformar en peor.

Una vez realizada la liquidación de prestaciones sociales con los parámetros dados en primera instancia, a la Sala le da un valor superior al reconocido por la A Quo, por lo tanto, al tratarse de un apelante único se mantendrá la condena determinada en la sentencia recurrida por concepto de prestaciones sociales y vacaciones.

**6. En lo que atañe a la indemnización y sanción moratoria del art 65 del CST y del art. 99 de la Ley 50 de 1990**

Pretende la parte accionada en su conjunto sea revocada, por no existir mala fe, porque su representado tuvo el convencimiento que no estaba frente a un contrato de trabajo, y que no es justo que se le impongan una sanción drástica a todos los demandados con respecto a unas obligaciones de las cuales tenían la plena conciencia equivocada. Argumento que no será aceptado por la Sala, toda vez que la demandada MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA por decisión propia decidió reconocerle a la accionante la liquidación de prestaciones sociales, de lo que se puede concluir, que contaba con el conocimiento que la prestación del servicio de la demandante se derivó de un contrato de trabajo y pese a ello, no realizó el pago de prestaciones sociales durante la vigencia del contrato de trabajo y al momento de terminar el contrato unilateralmente existió una mora en el pago hasta el 31 de marzo de 2019.

En este mismo sentido, considera la Sala que las señoras MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA y MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA era consciente que la labor desempeñada por la hoy demandante, era la de una empleada del servicio doméstico, y tan es así, que la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA realizó el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo. Y la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA conoció la liquidación de prestaciones sociales cancelada por su madre a la demandante una vez finalizado el contrato de trabajo, pero consideró que la liquidación la debía hacer su madre porque fue ella quien le dijo a la demandante que fuera a colaborar (según fue narrado en el interrogatorio de parte), sin que por lo

menos se haya percatado que en la liquidación definitiva se incluyeran los días laborados por la demandante en su beneficio.

A diferencia de lo anterior, considera esta Corporación que la indemnización moratoria y sanción moratoria del art. 65 del CST y art. 99 de la Ley 50 de 1993 impuestas al Sr. GUILLERMO CADAVID, están llamadas a ser REVOCADAS, por efectos de la buena fe observada, luego de que el demandado estaba bajo el convencimiento de la inexistencia de una relación laboral, porque la labor desempeñada por la demandante tenía poca periodicidad, no le impartía ordenes, no determinaba los días que debía laborar y le pagaba el valor que la demandante determinaba (según lo informó en su interrogatorio de parte), adicionalmente ninguno de los testigos dan fe de las ordenes impartidas por el demandado. En virtud de lo anterior, se REVOCARÁ la sentencia por estos conceptos al Sr. GUILLERMO CADAVID.

En relación a la **sanción del art. 1º de la Ley 52 de 1975** a cargo el Sr. GUILLERMO CADAVID, al dar la liquidación realizada desde el año 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 da una suma superior a la reconocida en primera instancia, se CONFIRMARÁ el valor reconocido en primera instancia por ser apelante único el hoy demandado y no existir inconformidad en la suma reconocida por la parte accionante.

Y en consideración a la modificación del extremo final del contrato de trabajo con el Sr. GUILLERMO CADAVID, la Sala debe realizar pronunciamiento, respecto a la forma como se deben efectuar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, debiéndose ACLARAR lo siguiente:

- Entre el 1º de enero de 2004 al 31 de mayo de 2011, la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA deberá asumir el pago de los aportes en forma individual y en su totalidad.
- Entre el 1º de junio de 2011 al 30 de diciembre de 2012, los señores MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA y GUILLERMO CADAVID asumirán el pago de los aportes en forma compartida en proporción a los días laborados para cada uno.
- Entre el 31 de diciembre de 2012 y el día anterior a la vigencia del Decreto 2616 de 2013, los señores MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA y GUILLERMO CADAVID asumirán el pago de los aportes pensionales en forma compartida y en proporción a los días laborados para cada uno.

- Y a partir de la vigencia del Decreto 2616 de 2013, cada uno de los demandados asumirán el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones conforme lo determina el art. 6 del Decreto en mención, hasta la fecha de la terminación del contrato con cada demandado; advirtiéndose que, en el caso del GUILLERMO CADAVID, el pago de los aportes será hasta el 1º de enero de 2018 y no hasta el 31 de diciembre de 2018 como se indicó en la sentencia de primera instancia.

## **7. De los hechos de la demanda que fueron desvirtuados**

Considera la parte recurrente que asalta la buena fe de los demandados, la accionante sin que hayan tenido consecuencias. Al respecto, considera la Sala que, si fueron desvirtuadas alguna de las afirmaciones de la demanda, trae como consecuencia la negación de las pretensiones. Verbigracia, se desvirtuó como extremo inicial del vínculo laboral el año 1994, y en consecuencia se admitió que el mismo tuvo lugar desde el año 2004 para la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, desde el año 2011 para el Sr. GUILLERMO CADAVID y desde el año 2012 para la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA, o el despido no demostrado, lo que trae como consecuencia el reconocimiento de las costas procesales disminuidas.

Costas en esta instancia a cargo de la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA en la suma de \$908.526 por no salir avante el recurso interpuesto; costas a cargo de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA en la suma de \$681.395 y a cargo del Sr. GUILLERMO CADAVID en la suma de \$227.132 por salir avante parcialmente los recursos presentados.

Frente a los demás aspectos alegados por la AFP Protección S.A, no se hará un pronunciamiento, teniendo en cuenta que el principio consonancia establecido en el art. 66A del CPT y SS establece “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, **deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación**” (resalto fuera del texto).

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

### RESUELVE:

**En relación a la demandada MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA:**

**PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE** la sentencia de primera instancia y en su lugar se **ABSOLVER** a la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA del reconocimiento y pago de la calzado y vestido de labor y del pago de la sanción del art. 1º de la Ley 52 de 1975.

**SEGUNDO: MODIFICAR** la sentencia recurrida, en el sentido de **CONDENAR** a la accionada MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA a reconocer y pagar a la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO, la suma de **\$2.700.000** por concepto indemnización moratoria causada desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019.

**En relación al demandado GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el extremo final del contrato de trabajo adoptado en primera instancia, para en su lugar **DECLARAR** que el contrato de trabajo existente entre los señores ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO y GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA tuvo lugar desde el **1º de junio de 2011 al 1º de enero de 2018**, conforme las razones expresadas, en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO: DECLARAR** que la Sra. ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO trabajó para el Sr. GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA **dos días al mes**, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: REVOCAR** la sentencia de primera instancia, para en su lugar **ABSOLVER** al Sr. GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA del reconocimiento y pago a la demandante, de la indemnización moratoria y sanción moratoria del art. 65 del CST y art. 99 de la Ley 50 de 1993.

**En relación a los tres demandados:**

**PRIMERO: ACLARAR** la forma como se deben efectuar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, quedando de la siguiente forma:

- Entre el 1º de enero de 2004 al 31 de mayo de 2011, la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA deberá asumir el pago de los aportes en forma individual y en su totalidad.
- Entre el 1º de junio de 2011 al 30 de diciembre de 2012, los señores MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA y GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA asumirán el pago de los aportes en forma compartida y en proporción a los días laborados para cada uno.
- Entre el 31 de diciembre de 2012 y el día anterior a la vigencia del Decreto 2616 de 2013, los señores MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA y GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA asumirán el pago de los aportes pensionales en forma compartida y en proporción a los días laborados para cada uno.
- Y a partir de la vigencia del Decreto 2616 de 2013, cada uno de los demandados asumirá el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones conforme lo determina el art. 6 del Decreto en mención, hasta la fecha de la terminación del contrato con cada demandado; advirtiéndose que en el caso del GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA, el pago de los aportes será hasta el 1º de enero de 2018 y no hasta el 31 de diciembre de 2018 como se indicó en la sentencia de primera instancia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Girardota, por las razones analizadas en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de la Sra. MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA en la suma de \$908.526 por no salir avante el recurso interpuesto; costas a cargo de la Sra. MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA en la suma de \$681.395 y a cargo del Sr. GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA en la suma de \$227.132 por salir avante parcialmente los recursos presentados.

Radicado Único Nacional 05-308-31-03-001-2019-00145-01  
Radicado Interno 070-21

Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**





**SECRETARIA SALA LABORAL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaria de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín  
notifica a las partes la sentencia

DEMANDANTE	: ADELA DE JESÚS BENJUMEA AGUDELO
DEMANDADO :	: MARÍA LUZ SILVIA SIERRA OCHOA, MARGARITA MARÍA DEL SOCORRO MUNERA SIERRA Y GUILLERMO LEÓN CADAVID SIERRA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-308-31-03-001-2019-00145-01
RADICADO INTERNO	: 070-21
DECISIÓN	: REVOCA PARCIALMENTE, ABSUELVE, MODIFICA, CONDENA, DECLARA, ACLARA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ**

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

*Fijado hoy martes 27 de julio de 2021 a las 8:00 Am  
de 2021 a la 5:00 Pm*

*Desfijado hoy martes 27 de julio*

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**

SECRETARIO